
De Boluarte, “Cuchillo” y otras excrecencias

Por: Arnaldo Musa / Cubasí

13/05/2025



Alguien me pregunta si con Dina Boluarte la oligarquía que la sostiene maniobrará para mantenerla en el poder por si no aparece alguien de su preferencia en las elecciones presidenciales señaladas para el 2026, reeditando lo que acaba de hacer Daniel Noboa en Ecuador, con fraude y traiciones de presuntos opositores incluidos.

Pero Noboa, además de manejar inconstitucionalmente fondos públicos para su conveniencia, tiene bastante dinero propio -de la familia más rica del país- para comprar voluntades en el ámbito electoral y castrense, en tanto es bendecido por el imperialismo norteamericano, al habilitarle bases militares en Manta y las Islas Galápagos, un patrimonio de la Humanidad.

Pero Boluarte alega que es pobre, el dinero no le alcanza, y ahora pretende que se le doble el salario mensual, debido a la alta jerarquía y las dificultades de su trabajo.

Ella no menciona los emolumentos que puede percibir de los partidos de derecha que controlan el Congreso, ni de los regalos de quienes le “obsequiaron” relojes Rolex y otras joyas que ha lucido desenfadadamente en una nación cada vez más hundida en la pobreza y controlada por el crimen organizado.

EL PEOR MOMENTO

Y es que la presidenta busca aumentarse el sueldo en al menos 125%, pese a la baja aprobación que tiene ante los ciudadanos de su país.

Según reveló el programa 'Panorama', de Panamericana TV, la mandataria quiere elevar su salario mensual a 35 568 soles (poco más de 9 700 dólares), de los alrededores de 16 000 soles (más de 4 300 dólares) que percibe actualmente.

La iniciativa fue plasmada en un informe del Ministerio de Economía y Finanzas, y que se encuentra ahora en manos de la Presidencia del Consejo de Ministros, a la espera de su aprobación.

Una de las principales razones que se brindan en el documento para justificar ese incremento salarial es una sugerencia del Fondo Monetario Internacional, que indica que las remuneraciones del sector público deben corresponder al valor del trabajo invertido.

Según el informe, al que también tuvo acceso Latina Noticias, el criterio del sueldo se basa en "la consistencia intergubernamental entre funciones y responsabilidades similares de entidades de la administración pública", y especifica que la presidenta ocupa el más alto cargo jerárquico.

Asimismo, se dice que el valor sugerido mantiene la referencia de los salarios presidenciales en la región, asegurando coherencia con el contexto internacional. De aprobarse la iniciativa, Boluarte pasaría a ser la segunda mandataria con mayor salario en Latinoamérica, solo detrás de Uruguay.

Aparte del sueldo, la presidenta goza de beneficios como la residencia en el Palacio de Gobierno, uso de vehículos oficiales, gastos de representación y cobertura de viajes, entre otros.

Esto se conoce cuando la mandataria cuenta con apenas 4% de aprobación, según una encuesta de la firma Datum para el medio conservador El Comercio.

Según los resultados de ese sondeo, además, la labor que viene desarrollando Boluarte como presidenta alcanza un rechazo del 94%.

"Por el momento social que estamos atravesando, creo que es el peor momento para hablar o proponer o instrumentar un aumento salarial [...] Mucha gente está asustadísima con la inseguridad ciudadana. El salario real refleja la productividad del trabajador y si hablamos de productividad de la presidenta Dina Boluarte, no precisamente vamos a hablar que está teniendo en sus años de gobierno una productividad elevada", dijo el economista Jorge González Izquierdo.

CUNDE EL MIEDO

No importa que la inteligencia, asesores y armamento de Estados Unidos hayan sido enviados para apuntalar al régimen peruano, porque el miedo invade hoy a la nación suramericana provocado por bandas que controlan y hacen y deshacen por doquier, como el reciente asesinato de 13 mineros secuestrados.

Los asesinatos ocurrieron en pleno estado de emergencia en Pataz, decretado desde febrero, debido al incremento de atentados ligados a mafias de la minería ilegal. La empresa Poderosa, además de confirmar el crimen, denunció la muerte violenta de otros 39 trabajadores.

La minera añadió que los homicidios no solo ocurrieron durante el estado de emergencia, sino también con la presencia de un importante "contingente policial", por lo que exigió al gobierno una estrategia más efectiva para combatir a las bandas criminales.

La respuesta inicial de las autoridades agravó la crisis, ya que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, puso en duda la veracidad del secuestro. Sus comentarios provocaron que congresistas de distintas bancadas impulsen una moción de censura en su contra y exigieran responsabilidades políticas por la falta de acción.

El Ministerio del Interior anunció el despliegue de un equipo élite del Grupo Especial contra el Crimen Organizado para dar con los autores de la masacre.

"CUCHILLO"

Reportes periodísticos dan cuenta de que Miguel Antonio Rodríguez Díaz, de 34 años, lidera 'La Gran Alianza', una red delictiva que ha acumulado cerca de 80 millones de soles (unos 21,3 millones de dólares) en bienes ilícitos, operando mediante la ocupación violenta de socavones, extorsiones a empresarios mineros y homicidios selectivos en Pataz.

En diciembre del 2023, Rodríguez Díaz fue capturado por la Policía Nacional, tras ser encontrado en posesión de armas y explosivos utilizados en un ataque anterior contra la minera Poderosa. Sin embargo, fue liberado

posteriormente por decisión fiscal, a pesar de las pruebas en su contra.

El delincuente habría asumido mayor poder en Pataz tras la muerte de Josué Oliver Blas Lezama, alias 'Gato Coté', cabecilla de la banda y asesinado en Colombia en septiembre del 2024.

En criterio del periodista Luis Vargas, no hubo secuestro, sino que se trató de una estrategia criminal para ganar tiempo y continuar extrayendo mineral ilegalmente.

"Los criminales llegaron, explotaron la pared que los dividía en el túnel, los torturaron y los ejecutaron. 'Cuchillo' tiene el modus operandi de usar la fachada de secuestro", subrayó.

Hoy hay toque de queda en la zona, se ha instalado una base militar y se dice que hay preparativos para evitar la repetición de hechos similares.

Pero, apunto, nada se puede esperar para la tranquilidad de un pueblo cuyas autoridades liberan culpables y encierran a inocentes que les estorban políticamente.
